

AUTONOMÍA CORPORAL Y POLÍTICAS DE SALUD

Los avances y retrocesos también se evidenciaron en el área de salud de la población LGBT. A pesar del *lobby* de las organizaciones de la sociedad civil, la cirugía de reasignación de sexo se volvió menos accesible que en 1991, cuando estaba a disposición en el hospital universitario. Con una demora promedio de ocho años en las operaciones, en 2010 solo se habían realizado quince, y muchos transexuales habían ido a Chile. En 2010, Ovejas Negras inició un diálogo con los directores del hospital para proponer la redacción de un protocolo para reducir el tiempo de espera a dos años y garantizar a los transexuales masculinos la prótesis que necesitaban para una operación de reasignación de sexo funcional. También solicitaron la creación de un centro de salud especial para concentrar y coordinar todos los servicios requeridos en la atención médica para transexuales. Desafortunadamente, el protocolo nunca se aplicó y, en 2012, el hospital dejó de realizar cirugías de reasignación de sexo porque el director del hospital consideró que tanto estas operaciones como las mastectomías “no eran una prioridad” (Aparicio, 2013).

Dado que las personas LGBT continuaron enfrentando problemas de acceso y de diagnósticos erróneos (ya que los médicos suponen una conducta heterosexual), se realizaron proyectos piloto que involucraron a actores estatales, académicos y personas del movimiento LGBT, con fondos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a fin de crear centros de atención de la salud libres de homofobia en el nivel primario. Esta experiencia se está institucionalizando en la red de centros de atención primaria de salud en el país.

CONCLUSIONES

La presente revisión de los dos primeros gobiernos nacionales de izquierda en Uruguay muestra que el ascenso del FA al poder brindó oportunidades para alcanzar logros significativos en áreas clave de las agendas feministas y de la diversidad sexual.

En el caso de la primera agenda, se avanzó en legislación y en el desarrollo de políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, en aspectos referidos a la violencia contra la mujer y en los derechos de las trabajadoras domésticas. Sin embargo, estos avances no son el simple resultado de una convergencia entre la agenda de la izquierda y las reivindicaciones feministas. De hecho, en ocasiones, las demandas feministas fueron rechazadas en forma abierta y, en otras, resistidas más sutilmente por actores con poder dentro de la izquierda. El bloqueo a la legalización del aborto –una medida aprobada por el Congreso del FA, que es su máxima autoridad– por parte de líderes de esa fuerza política plantea interrogantes sobre el alcance